



No 5-Adv. Lluís Pau Gratacós (Cont. A. 12.)  
 C/ Plaça Vella, 17-004, GIRONA Id. 12301723

1/6

A-12

Jutjat Contenciós Administratiu 3 Girona (UPSD Cont. Administrativa 3)  
 Plaça de Josep Maria Lidón Corbí, 1  
 17001 Girona

Recurs: Procediment abreujat núm. 72/2018-Secció A

Part actora:   
 Representant: Advocada: Marta Alsina Conesa

Part demandada: AJUNTAMENT DE GIRONA  
 Representant: Lletrat del Servei Jurídic Contenciós de l'Ajuntament: Lluís Pau Gratacós

Part codemandada:   
 Representant: Procurador: Joan Ros Cornell  
 Advocat: Eduard Porta Domenech

**SENTÈNCIA núm. 174/2019**

Girona, 4 de juliol de 2019.

Joan Ficapal Cusí, Jutge substitut del Jutjat Contenciós administratiu núm. 3 de Girona i província, he vist el recurs promogut pel senyor \_\_\_\_\_ contra l' AJUNTAMENT DE GIRONA i \_\_\_\_\_ A e té els següents,

**ANTECEDENTS**

**PRIMER.-** El dia 14 de març de 2018 es va presentar per la representació de la recurrent escrit d'interposició corresponent a aquest recurs.

**SEGON.-** Atès que per matèria i quantia va correspondre el procediment abreujat previst a l'article 78 de la Llei 29/98, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es va assenyalar la vista per al dia 26 de juny de 2019. Comparegudes les parts el dia assenyalat, es va celebrar l'acte de la vista, en què l'actora es ratificà en la demanda presentada, mentre que la demandada i la seva asseguradora s'hi oposà tot sol·licitant la desestimació.



Registre d'entrada  
 Ajuntament de Girona Núm: 2019057440  
 Dia i hora : 11/07/2019 12:16  
 Registre : O\_INTERN mrr  
 Area de destí : SERVEIS JURÍDICS DE RÈGIM INTERIOR



d'aquest recurs. Acte seguit i a proposta de les parts hom fixà la quantia d'aquest procés en 1.142 euros, després del que les parts varen proposar prova que va ser admesa i practicada amb el resultat que figura a les actuacions. Finalment, les parts van exposar les seves respectives conclusions.

**TERCER.-** En la tramitació d'aquestes actuacions s'han acomplert les prescripcions legals.

### FONAMENTS DE DRET

**PRIMER.-** Per la part actora s'ha interposat el present recurs contenciós administratiu contra la resolució de data 10 de febrer de 2017 de l'Ajuntament de Girona que estima en part la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent per danys morals, perjudicis i despeses irrogades com a conseqüència de la revocació d'una resolució sancionadora per infracció de trànsit.

**SEGON.-** D'acord amb l'article 32.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -equivalent a l'anterior art. 142.4 Llei 30/92- "*Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.*". I l'apartat 2 afegeix que "*En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.*"

Així, s'estableix que l'anul·lació, en via administrativa o contenciosa administrativa, dels actes o disposicions administratives no pressuposa, per si mateixa, dret a la indemnització.

D'altra banda, la Sentència del Tribunal Suprem, Sala 3<sup>a</sup>, de 26 d'octubre de 2011, estableix:

*"TERCERO.- No ofrece duda que el artículo 142, apartado 4, LRJAPAC, de igual contenido en el precedente artículo 40, apartado 2, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957 de que la anulación en la vía administrativa o jurisdiccional de un acto o de una disposición de la administración no presupone el derecho a indemnización, lo que implica tanto como decir que habrá lugar a ella cuando se cumplan los requisitos precisos.*

*Como expresa la jurisprudencia de esta Sala, recordada en la Sentencia de esta Sala y Sección de 4 de noviembre de 2010, recurso de casación 818/2009 EDJ 2010/241796, deben rechazarse las tesis maximalistas tanto las que defienden que no cabe nunca derivar la responsabilidad patrimonial de la Administración autora de un acto anulado como las que sostienen su existencia en todo caso sentencias de*





esta Sala de 18 de diciembre de 2000, recurso de casación 8669/96 FJ 2º EDJ 2000/49635; 5 de febrero de 1996, recurso de casación 2034/93, FJ 2º EDJ 1996/982 ; y 14 de julio de 2008, recurso de casación para la unificación de doctrina 289/07, FJ 3º EDJ 2008/128263.

Ha subrayado este Sala, Sección Sexta en la sentencia de 14 de julio de 2008, recurso de casación 289/07 (FJ 4º) EDJ 2008/128263 y en la de 22 de septiembre del mismo año, recurso de casación para la unificación de doctrina 324/07, FJ 3º EDJ 2008/173237, para determinar si un sujeto de derecho está obligado jurídicamente a soportar el daño que le ha infligido el funcionamiento de un servicio público, uno de los elementos a tomar en consideración es la naturaleza misma de la actividad administrativa.

Como reitera la Sentencia de 16 de febrero de 2009, recurso de casación 1887/2007 EDJ 2009/15205, "el panorama no es igual si se trata del ejercicio de potestades discrecionales, en las que la Administración puede optar entre diversas alternativas, indiferentes jurídicamente, sin más límite que la arbitrariedad que proscribiera el artículo 9, apartado 3, de la Constitución EDL 1978/3879, que si actúa poderes reglados, en lo que no dispone de margen de apreciación, limitándose a ejecutar los dictados del legislador. Y ya en este segundo grupo, habrá que discernir entre aquellas actuaciones en las que la predefinición agotadora alcanza todos los elementos de la proposición normativa y las que, acudiendo a la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, impelen a la Administración a alcanzar en el caso concreto la única solución justa posible mediante la valoración de las circunstancias concurrentes, para comprobar si a la realidad sobre la que actúa le conviene la proposición normativa delimitada de forma imprecisa. Si la solución adoptada se produce dentro de los márgenes de lo razonable y de forma razonada, el administrado queda compelido a soportar las consecuencias perjudiciales que para su patrimonio jurídico derivan de la actuación administrativa, desapareciendo así la antijuridicidad de la lesión (véase nuestra sentencia de 5 de febrero de 1996, ya citada, FJ 3º, rememorada en la de 24 de enero de 2006(casación 536/02, FJ 3º) EDJ 2006/16098; en igual sentido se manifestaron las sentencias de 13 de enero de 2000 (casación 7837/95, FJ 2º) EDJ 2000/726, 12 de septiembre de 2006 (casación 2053/02, FJ 5º) EDJ 2006/261539, 5 de junio de 2007 (casación 9139/03, FJ 2º) EDJ 2007/135813, 31 de enero de 2008 (casación 4065/03, FJ 3º EDJ 2008/6217º y 5 de febrero de 2008 (recurso directo 315/06, FJ 3º) EDJ 2008/13751)."

Añade que "no acaba aquí el catálogo de situaciones en las que, atendiendo al cariz de la actividad administrativa de la que emana el daño, puede concluirse que el particular afectado debe sobrellevarlo. También resulta posible que, ante actos dictados en virtud de facultades absolutamente regladas, proceda el sacrificio individual, no obstante su anulación posterior, porque se ejerciten dentro de los márgenes de razonabilidad que cabe esperar de una Administración pública llamada a satisfacer los intereses generales y que, por ende, no puede quedar paralizada ante el temor de que, si revisadas y anuladas sus decisiones, tenga que compensar al afectado con cargo a los presupuestos públicos, en todo caso y con abstracción de las circunstancias concurrentes. En definitiva, para apreciar si el detrimento patrimonial que supone para un administrado el funcionamiento de un determinado





*servicio público resulta antijurídico ha de analizarse la índole de la actividad administrativa y si responde a los parámetros de racionalidad exigibles. Esto es, si, pese a su anulación, la decisión administrativa refleja una interpretación razonable de las normas que aplica, enderezada a satisfacer los fines para los que se la ha atribuido la potestad que ejercita. Así lo hemos expresado en las dos sentencias referidas de 14 de julio EDJ 2008/128263 y 22 de septiembre de 2008, dictadas en unificación de doctrina EDJ 2008/173273 (FFJJ 4º y 3º, respectivamente).*

*CUARTO.- Avanzando en la argumentación se hace preciso tomar en consideración la reiterada doctrina de esta Sala (por todas la STS de 1 de julio de 2009, recurso de casación 1515/2005 EDJ 2009/171861 y las sentencias allí recogidas) sobre que "no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa".*

*No debe olvidarse que conforme a reiterada jurisprudencia (Sentencia de esta Sala y Sección de 4 de noviembre de 2010, rec. casación 818/2009 EDJ 2010/241796 con cita de otras anteriores) la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. En consecuencia es la antijuridicidad del resultado o lesión lo relevante para la declaración de responsabilidad patrimonial imputable a la Administración por lo que resulta necesaria la acreditación de su acaecimiento."*

En el present cas, resulten acreditats de les actuacions els següents fets:

- 1.- Per Decret de l'Alcaldia de data 15 de juny de 2015 es va imposar al recurrent una sanció de 200 euros per no respectar el llum vermell d'un semàfor pel conductor del vehicle el dia 15 de febrer de 2015.
- 2.- Per Decret de l'Alcaldia de data 16 de desembre de 2015 es va revocar l'anterior resolució sancionadora atès el contingut de les al·legacions presentades per la persona interessada i l'informe de l'agent denunciant recolzat per la filmació de vídeo i fotografies realitzades per la càmera situada en el lloc de la infracció, amb els que s'acredita la no comissió de la infracció denunciada.
- 3.- En data 24 de febrer de 2016 el recurrent presenta reclamació per responsabilitat patrimonial per danys morals, perjudicis i despeses irrogades com a conseqüència de la improcedent tramitació de l'anterior expedient sancionador.
- 4.- Per resolució de data 10 de febrer de 2017 l'Ajuntament de Girona estima en part la reclamació, desestimant per improcedent l'import de la indemnització interessada quantificada en 1.142 euros per despeses i danys morals, i indemnitzant al reclamant en la quantia de 242 euros en concepte de despeses generades per la defensa jurídica.
- 5.- Contra l'anterior resolució s'ha interposat el present recurs contenciós.





Doncs bé, aquest Jutge considera que en el supòsit enjudiciat, l'Administració en adoptar la resolució sancionadora que després va resultar anul·lada es va mantenir dins dels marges raonats i raonables que exigeix la jurisprudència per a entendre que desapareix el caràcter antijurídic del dany o lesió, faltant així aquest requisit exigít per al naixement de la responsabilitat patrimonial, atès que en exercici de les seves competències de control del trànsit que afecta a l'interès general va imposar una sanció el 15 de juny de 2015 i recorreguda en reposició la va anul·lar el 16 de desembre de 2015 de forma degudament motivada, i la resolució de la reclamació de responsabilitat patrimonial reconeix el pagament dels honoraris de la defensa jurídica, indemnització que es considera suficient ateses les circumstàncies concurrents.

Per tot això, desestimo el present recurs contenciós administratiu.

**TERCER.-** A tenor dels articles 68.2 i 139.1 de la Llei Jurisdiccional, modificat aquest últim per la Llei 37/2011, de 10 d'octubre, de mesures d'agilitació processal, les costes processals s'imposaran en primera o en única instància a aquella part que hagi vist rebutjades totes les seves pretensions en la sentència o resolució del recurs o incident, tret que l'òrgan judicial, raonant-ho degudament, aprecii l'eventual concurrència de circumstàncies que justifiquin la no imposició, sense que obsti a això, si escau, la falta de sol·licitud expressa de condemna en costes per les parts, atès que tal pronunciament judicial sobre costes és sempre imperatiu, sense incórrer per això en un vici d'incongruència processal ultra petita partium -articles 24.1 CE i 33.1 i 67.1 LJCA-, en concernir aquesta declaració judicial a una qüestió de naturalesa jurídic processal, de conformitat amb el tenor de l'article 68.2 de la Llei jurisdiccional i de la ja reiterada Jurisprudència contenciosa administrativa i constitucional sobre aquest tema (entre d'altres, STS, Sala Contenciosa Administrativa, de 12 de febrer de 1991; i SSTC, Sala Primera, núm. 53/2007, de 12 de març, i núm. 24/2010, de 27 d'abril).

Es recull així el principi del venciment mitigat que haurà de conduir aquí a la no imposició de costes tenint en compte que la singularitat de la qüestió debatuda veda estimar que es trobés totalment absent en el present cas iusta causa litigandi ("seriosos dubtes de fet o dret"), tenint en compte la Jurisprudència ja recaiguda en casos similars per apreciar que el cas era jurídicament dubtós, com assenyala l'article 394.1 de la Llei 1/2000, d'Enjudiciament Civil.

Atesos els fonaments esmentats,

**HE RESULT DESESTIMAR I DESESTIMO** el recurs interposat per la representació del senyor [redactat] contra la resolució de data 10 de febrer de 2017 de l'Ajuntament de Girona que estima en part la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent, tot confirmant la resolució impugnada. Sense pronunciament sobre les costes processals.





Contra aquesta sentència no es pot interposar cap recurs ordinari, de conformitat amb allò que preveu l'article 81 de la Llei jurisdiccional.

Ho pronuncio, mano i signo.

**PUBLICACIÓ.**- L'anterior sentència ha estat donada, llegida i publicada en el dia de la seva data per aquest Jutge que la subscriu, del que jo, la Lletrada de l'Administració de Justícia, dono fe.-

